

**Acción colectiva e incidencia político-electoral de los sectores
de la diversidad sexual en México**

Dr. Emanuel Rodríguez Domínguez¹

Propuesta de ponencia
XXVII CONGRESO NACIONAL
DE ESTUDIOS ELECTORALES:
EL NUEVO MAPA ELECTORAL MEXICANO
Guanajuato, Guanajuato del 14 al 16 de noviembre de 2016.

En la presente buscamos hacer un recuento de la historia de la representación política de la Diversidad Sexual, para posteriormente reflexionar en torno a los nuevos escenarios que se han ido configurando y los claroscuros presentes en los mismos. Consideramos que el ejercicio de las organizaciones LGBTI debe problematizarse especialmente desde la conformación de candidaturas y células intrapartidarias destinadas a esta población pues se han convertido en una pieza importante en la pugna político-electoral que se está desarrollando actualmente en la capital del país.

La relación de los sectores LGBTI² en México empezó a tomar importancia a principios de la década de los ochenta, sobre todo en la ciudad capital. Después de la primera marcha del Orgullo Homosexual llevada a cabo en julio de 1979 (Laguarda, 2010:81), los colectivos empezaron a ganar visibilidad y los partidos políticos de izquierda empezaron a interesarse en ellos. Fue así como en 1982 se conformó el Comité de Lesbianas y Homosexuales en Apoyo a Rosario Ibarra (CLHARI), candidata presidencial del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y que incluyó las postulaciones de Lupita García de Alba y Pedro Preciado en Guadalajara y de Claudia Hinojosa y Max Mejía en el Distrito Federal, todos ellos ligados a organizaciones de la diversidad sexual (Diez, 2011).

¹ Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Correo electrónico: manu.rodriguez@políticas.unam.mx

² Siglas internacionales para identificar a mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales, trans (transgénero, transexuales y travestis) e intersexuales

En esos años también se puede identificar el respaldo de las organizaciones LGBTI a las luchas feministas relacionadas con la despenalización del aborto y los derechos reproductivos. No obstante, los efectos del VIH-SIDA mermaron la organización política en la segunda mitad de la década de los ochenta.

Enmarcado en un ambiente de apertura política y debate sobre la despenalización del aborto en 1997 se llevó a cabo el Primer Foro Legislativo sobre Diversidad Sexual y Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el cual tenía como objetivo promover las reformas a los códigos civiles para permitir las sociedades de convivencia (antecedente del matrimonio entre parejas del mismo sexo). Este foro también consolidó el término Diversidad Sexual, mismo que serviría como bandera de lucha de diversas identidades disidentes.

No obstante, previo a la elección presidencial del 2000, los perredistas decidieron congelar cualquier iniciativa relacionada tanto con las luchas feministas, como con las demandas de los sectores LGBTI, al evaluar pragmáticamente junto con los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que no valía la pena desgastarse políticamente en dichos temas ante la expectativa de que el Partido Acción Nacional, opositor expreso de estas iniciativas, se perfilaba como el vencedor de los comicios presidenciales de ese año.

A través de la lucha por la despenalización del aborto diversas organizaciones feministas y de la Diversidad Sexual establecieron una relación más estrecha con actores políticos como el Partido de la Revolución Democrática. Fue así como estos sectores cobraron importancia en las arenas políticas locales y los partidos de centro-izquierda comenzaron a respaldar sus agendas, lo que conllevó a que el 21 de diciembre de 2009, el tema de los derechos sexuales y reproductivos volvió a ocupar la agenda de la ALDF, ahora para discutir y aprobar la ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, normatividad que también legalizó su derecho a la adopción. Esta ventana de incidencia

legislativa de las organizaciones sociales LGBTI fue reflexionada de la siguiente manera por uno de los actores involucrados en esta coyuntura:

En ese debate [sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo] había una visión que se manifestaba en contra del matrimonio heterosexual, pues según lo que "nosotros" buscábamos como LGBTI era manifestar nuestra libertad sexual. Sin embargo, otros grupos del movimiento teníamos claro que lo que perseguíamos era una figura que nos protegiera y nos dotara de derechos de igualdad. Eso solamente el matrimonio nos lo podía otorgar, todas las otras figuras con los nombres diferentes que les han puesto son figuras que otorgan solamente derechos parciales [...] Sobre esa línea fue que empezamos a hacer presión para llevar nuestra agenda a los partidos políticos, teniendo claro que las luchas anteriores [entre las que se encuentra la despenalización del aborto] de alguna manera hizo que los partidos y los gobiernos también voltearan a vernos.

Otro momento de incidencia de las organizaciones LGBTI en las agendas legislativas es el caso de la Ley de Identidad de Género para personas Trans en la Ciudad de México. Los primeros debates sobre esta propuesta legislativa (conocida como la "Reforma Trans") se remontan al año 2007, cuando fue promovida por la bancada perredista a petición expresa de diversas organizaciones sociales que defendían la agenda de los sectores de la Diversidad Sexual. La propuesta original consensada entre los diputados de los partidos de izquierda y las organizaciones LGBTI contemplaba una Ley Federal para el Tratamiento de las Personas Transgénero-Transexuales, que avanzaba de manera integral en el reconocimiento de los derechos plenos, ya que no sólo permitiría el reconocimiento legal de la identidad de género, sino que también buscaba garantizar el derecho a servicios de salud dignos y la protección laboral por parte del Estado para las personas trans. Sin embargo, en agosto de 2008, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal desecharon el proyecto original y sólo aprobaron un conjunto de modificaciones a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles que permitían a las personas transexuales y

transgénero solicitar un juicio especial, el cual requería peritajes médicos y psicológicos para obtener la expedición de una nueva acta de nacimiento que acreditaría su identidad sexual y sólo una vez realizado este trámite podrían contraer matrimonio civil.

Posteriormente, producto de las movilizaciones y cabildos de por lo menos 50 organizaciones sociales LGBTI, agrupadas en la Coalición T-47, a mediados de 2014 el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó a la ALDF una iniciativa de ley con la que se reconoce la identidad de género de la población transexual, transgénero y travesti mediante un sólo trámite en el Registro Civil, eliminando con ello los sentidos discriminatorios de los cambios legislativos obtenidos en 2008.

En el campo electoral la primera década del siglo XXI puede ser vista como un “boom” de las candidaturas vinculadas con los sectores de la diversidad sexual. Desde el año 2009 el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo firmaron un acuerdo con activistas y organizaciones del movimiento de la Diversidad sexual con el fin de impulsar una agenda legislativa para este sector a nivel nacional.

No obstante, el partido que más impulsó a los integrantes de estos colectivos en las candidaturas locales fue el Partido Socialdemócrata (PSD), al tener 32 candidaturas asignadas entre las que figuraban Concepción Castillo Peñaloza, candidato a diputado federal por el Estado de México; Lol Kin Castañeda Badillo, candidata a diputada local a la ALDF; Mario Alonso Prado “Glenda”, candidata a diputada federal por Nuevo León; Víctor Manuel Espíndola Villegas, candidato a diputado federal por Jalisco; y Miguel Galán Reyes, candidato a alcalde de Guadalajara.

Por su parte, el Partido del Trabajo (PT), apoyó como candidatos locales a la ALDF a Manuel Amador Velázquez y Jaime López Vela. Vale decir que muchos de estos actores intentaron obtener una candidatura en el proceso de elección interna del PRD, pero ante su poca capacidad de incidencia optaron por buscar cabida en otras opciones partidarias.

Dentro del PRD vinculados a la identidad disidente sólo figuraban Edgar Sierra, candidato a diputado federal por el estado de Nuevo León, y Enoé Uranga Muñoz aspirante a diputada federal vía plurinominal por la cuarta circunscripción del Distrito Federal. Es de destacar que el PRI apoyó a Mario Rodríguez Platas en su candidatura a Regidor suplente de Monterrey en Nuevo León, puesto que consiguió en el 2009.

En el año 2012 dos mujeres trans se presentaron como candidatas por el PRD, Diana Laura Marroquin Bayardo para diputada federal por el estado de Hidalgo y Diana Sánchez barrios para diputada local en la ciudad de México, ambas contaban con estatus legal y cambio de identidad ganados en juicios individuales. Tres años después los actores de la Diversidad Sexual volvieron a figurar, Jaime López Vela como candidato a diputado federal por el distrito 11 del Distrito Federal y Diana Sánchez ahora como precandidata a la jefatura delegacional en Cuauhtémoc.

Nuevas ventanas y escenarios

Las modificaciones legislativas que han favorecido el reconocimiento de los derechos de los sectores LGBTI, también han promovido el desarrollo de un nuevo escenario político en la Ciudad de México compuesto por las múltiples interacciones entre los actores institucionales (legisladores y autoridades locales), los partidos políticos, los representantes de la Iglesia Católica y las organizaciones LGBTI.

Las tensiones al interior de los nuevos escenarios han conformado diversas arenas político-electorales, en donde se pueden observar todo tipo de negociaciones, alianzas, complicidades, acuerdos y conflictos. Así pues, algunos grupos partidarios han vislumbrado las luchas por el reconocimiento de los sectores LGBTI como un "nicho electoral" nada despreciable en una contienda electoral o como una agenda de coyuntura política que les puede servir para incidir en la opinión pública de los sectores sociales que se expresan a favor o en contra de las leyes promulgadas en pro de la diversidad sexual (Geisser, Soum y Franco, 2011). Derivado de lo anterior, otros grupos partidarios (entre los que

destaca el PAN) han respaldado las presiones de la Iglesia Católica, como las de las organizaciones civiles vinculadas a ella, para interponer recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objetivo de revocar los cambios legislativos tanto sobre la despenalización del aborto, como de las leyes en favor de los derechos de los sectores LGBTI, esfuerzos que no han prosperado.

En efecto, existe una ventana de oportunidad política para los sectores LGBTI, incluso dentro de los partidos políticos, los cuales empezaron a tomar en cuenta sus demandas e incluso a crear células de la Diversidad Sexual, además de que las organizaciones han presionado para ser representadas en las candidaturas de las estructuras partidarias que respalda. No obstante, como lo veremos a continuación, todas estas acciones se construyen con base en la rentabilidad político-electoral y no sobre el reconocimiento de los derechos de aquellos actores sociales que suscriben las demandas de los colectivos de la diversidad sexual, tal como lo muestra el siguiente testimonio:

El tema LGBTI lo están utilizando. Están agarrando de bandera el tema de derechos humanos de nuestra población para meter votos. La Comisión de la Diversidad Sexual que era la estructura para representar a tres poblaciones: lesbiana, trans y hombre gay. Ahora metieron nada más a tres gays, no quisieron que entrara ni una lesbiana ni nada más, entonces está canijo. Además, literal nos meten en el sótano, nuestras oficinas están en el sótano del edificio del partido.

En cuanto a las células (comisiones, coordinaciones o secretarías) de la Diversidad Sexual, el PSD fue la primera organización partidaria que integró dentro de su estructura al Colectivo Diversidad Alternativa, con el objetivo de reforzar la candidatura presidencial de Patricia Mercado. En el 2008 el PRD anunció como parte de los resolutivos de su IX Congreso Nacional, la creación de la Comisión Nacional de la Diversidad Sexual del Partido, instancia que será la base para la creación de subsecretarías estatales. Ese mismo año el PT firmó un acuerdo con diversas organizaciones LGBTI para respaldar la Agenda del

Movimiento Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual e Intersexual junto con el PRD en la ALDF. Todos estos hechos serán la base para que en las elecciones del 2009 se presentara el denominado "auge" o "boom" de las candidaturas de la diversidad sexual, del que ya hemos hablado.

Ahora bien, una vez que se han formalizado algunas estructura internas destinadas a los sectores LGBTI en los partidos políticos la pugna por estos espacios se encuentra subordinada a las luchas faccionales que acontecen al interior de los mismos.

No obstante, ello no niega que hoy en día el PRD haya formalizado sus estatutos internos, para promover la inclusión de candidatos plurinominales que representen los intereses de los sectores LGBTI, así como también este partido promovió la creación de una Secretaria de la Diversidad Sexual que ha reemplazado a la Comisión interna del partido.

En el mismo sentido, MORENA desde su surgimiento ha promovido la inclusión de candidatos de los sectores LGBTI y estableció la creación de una Secretaria Nacional de la Diversidad Sexual. Estos sucesos han hecho que partidos como el PRI y el Partido Verde (PV) empiecen a debatir su apertura a estos sectores, al grado que los priistas actualmente cuentan con un grupo denominado Unión Ciudadana por la Diversidad Sexual, vinculado a la Confederación de Sectores Populares de este partido y una Coordinación de Diversidad Sexual en la capital del país.

Los claroscuros de la representación política de la Diversidad Sexual

Si bien la interlocución y articulación de las organizaciones LGBTI con algunos partidos políticos ha permitido que sus demandas sean tomadas en cuenta y han logrado avances en legislaciones concernientes a derechos sexuales y reproductivos, matrimonio entre parejas del mismo sexo y despenalización del aborto, cambio de identidad, entre otros, las agendas de esas organizaciones deben entrar en el proceso de negociaciones con las estructuras partidarias y enfrentarse a los conflictos que existen dentro de ellas, además de las

organizaciones religiosas, los grupos conservadores e incluso los partidos que sólo buscan el “voto rosa”.

Así pues, la inclusión de sectores LGBTI a las estructuras partidarias ha generado que la autonomía de estas organizaciones sociales se vea trastocada, al incorporar dentro de sus marcos de acción las agendas particulares de un grupo o facción partidaria

Por otra parte, las organizaciones que representan a los sectores LGBTI han sido ocupadas por algunas de las principales figuras para posicionar su imagen entre la ciudadanía en periodos no electorales, aumentar su prestigio político mediante labores de gestión y, en su caso, competir en las elecciones internas de su partido para ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular.

Así, las organizaciones sociales LGBTI que realizan “labores comunitarias” con fines políticos se han convertido en un dispositivo para efectuar campañas políticas fuera de los tiempos electorales, pues el actuar de estas organizaciones en el espacio público se puede capitalizar para apuntalar votos en las elecciones internas de los partidos y seleccionar a los candidatos a un puesto de elección popular, así como para ir tejiendo posibles redes de apoyo en las colonias para ser utilizadas en las “campañas a pie”, es decir, cuando los candidatos recorren una colonia y hacen proselitismo político sección por sección.

De la misma forma, este tipo de organizaciones sociales en algunas ocasiones reproducen la intermediación política y las redes de control electoral mediante acciones que se encubren bajo el discurso de la asistencia social y el fomento a la participación ciudadana, pues se encuentran ligadas a los principales grupos políticos que tienen presencia en una demarcación.

En consecuencia, entre dichas organizaciones se lleva a cabo una competencia no declarada por las candidaturas o comisiones intrapartidarias, afín de que sus líderes lleguen a esos cargos. Este “diferencialismo controlado” contribuye a retrasar la inserción política de una mayoría de los militantes de las minorías, además de obstaculizar la articulación con organizaciones similares que

también demandan la extensión de los derechos ciudadanos para dichos sectores. (idem).

En este sentido, en la mayoría de los casos analizados, las candidaturas "ciudadanas" o de los líderes de los colectivos feministas y de LGBTI buscan nombrar para puestos visibles a algunos actores que son identificados como parte de la "diversidad" y constituyen una estrategia más de los partidos, para aminorar tanto los altos índices de desafección política existentes entre la ciudadanía, como las acciones de rechazo mediante las cuales un amplio sector de la población expresa su desencanto con la democracia representativa.

En resumen, no podemos negar que el actuar de las organizaciones sociales de LGBTI ha logrado abrir un espacio de influencia política, para que estos sectores sean considerados en los debates legislativos sobre las políticas públicas que los impactan directamente, asimismo a través de esas organizaciones se ha logrado conformar una arena de negociación con los partidos y el gobierno, la cual ha materializado una ventana de oportunidad para lograr que sus demandas sean tomadas en cuenta en el diseño e implementación de legislaciones.

Sin embargo, esas organizaciones se encuentran insertas en una lógica pragmática por parte de los partidos políticos, quienes se han preocupado más por parecer "diversos" y de esta forma no perder votos de esos sectores que por dar un verdadero espacio de representación política, por el que los grupos LGBTI siguen presionando.

Queda pendiente la tarea de analizar la calidad de las candidaturas que han tenido de los y las representantes LGBTI, así como el funcionamiento de las células intrapartidarias; además de estudiar los avances y limitaciones en cada estado del país.

Referencias

- Geisser, Vincent, El Yamine Soum y Germán Franco (2011), "La promoción de la diversidad en los partidos políticos: ¿una respuesta política a la discriminación?", en *Foro Internacional*, Vol. 51, No. 2.

- Diez, Jordi (2011), "La trayectoria política del movimiento Lésbico-Gay en México", en *Estudios Sociológicos*, Vol. 29, No. 86, mayo-agosto.
- Laguarda, Rodrigo (2010) *Ser gay en la ciudad de México. Lucha de representaciones y apropiación de una identidad, 1968-1982*, México: CIESAS, Instituto Mora.